A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley para su debate en la comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, sobre **medidas para la protección del Parque Nacional de Doñana.**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Doñana fue declarado Parque Nacional en 1969 y ampliado sucesivamente, con la intención de proteger sus 54.252 hectáreas de extensión, un tesoro natural que alberga en sus marismas y costas, entre otras, más de 300 especies de aves. Su enorme valor ecológico motivó que fuera declarado sitio Ramsar en 1982, y que se incluyera en la Red Natura como ZEPA y Zona de Especial Conservación y lugar Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el año 1994, siendo una de las más grandes e importantes reservas de la biosfera de España, con casi 270.000 hectáreas protegidas, incluido todo el Espacio Natural Doñana (74,278 ha) y su área de influencia socioeconómica.

Sin embargo, son muchos los peligros que todavía ponen en riesgo la conservación de Doñana, su fauna y su flora. Su privilegiado enclave, cercano a la desembocadura del Guadalquivir, también lo convierte en objeto de sobreexplotación. Son ya muchos los años que las organizaciones ecologistas y numerosas entidades o instituciones vienen denunciando la escandalosa proliferación de pozos ilegales y la contaminación de sus aguas. Además, estas actividades ilegales aportan diversos compuestos tóxicos como metales, dioxinas, hidrocarburos, fertilizantes, pesticidas, fármacos o detergentes. Todo ello ha provocado un grave deterioro de los ecosistemas. A título de ejemplo, Doñana ha pasado de tener 2.867 lagunas temporales en 2004 a solo dos en la actualidad.

En abril de 2010, la organización ecologista WWF España presentó una queja en Bruselas en la que se denunciaba la extracción abusiva e insostenible de agua en el entorno de Doñana con destino al cultivo intensivo de fresas. Como consecuencia de este procedimiento el estado español ya ha sido condenado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que hizo pública el pasado mes de junio una sentencia en la que concluye que las extracciones desmesuradas de agua subterránea en el Espacio Natural de Doñana incumplen el derecho comunitario, en concreto, las Directivas Marco del Agua y Hábitats. La sentencia también señala la inacción de España ante los efectos negativos de las extracciones de agua y manifiesta la falta de información sobre el estado de las aguas subterráneas, debido sobre todo al desconocimiento de la Administración sobre las captaciones ilegales.

Doñana lleva décadas sufriendo el expolio de su acuífero, fundamentalmente para el riego de fresas y otros frutos rojos, aunque también para arroz o algodón, lo que ha provocado un descenso en los niveles de las aguas subterráneas. Una situación que se agrava, más aún, con las sequías que se vienen padeciendo durante años y que amenazan con la desertización, lo que supondría la degradación ecológica definitiva del espacio y la desaparición de suelo fértil y productivo en su entorno. Ello sería letal para el futuro del Parque y los 14 municipios de Huelva, Sevilla y Cádiz que viven de sus ramales de agua dulce.

Con esta delicada situación, en enero de 2022 hemos visto cómo algunos grupos del Parlamento de Andalucía, entre ellos los que forman parte del Gobierno autonómico de la Junta, han registrado una Proposición de Ley para la revisión del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal de Doñana, también llamado el “Plan de la fresa”. Con dicha Proposición de Ley se pretende regularizar y legalizar una gran cantidad de pozos e infraestructuras extractoras de agua, así como 1.400 hectáreas nuevas de regadío, bajo la premisa de dar “seguridad jurídica a los agricultores de la zona”, aunque esta reforma signifique un drenando alarmante el agua de Doñana.

Una investigación a pie de campo realizada por el Fondo Mundial para la Naturaleza, usando datos oficiales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, estima que existen más de 2.000 infraestructuras para la captación en arroyos, acuíferos, balsas o pozos. Muchas de estas infraestructuras pertenecen a explotaciones agrarias irregulares, que vulneran el actual marco jurídico y que, lejos de remitir, han hecho que la superficie de cultivos rojos en situación irregular haya aumentado en más de un 15% durante los últimos años.

La proposición de Ley registrada en el Parlamento Andaluz, con visos de aprobarse, supondría un espaldarazo definitivo tanto a los actuales pozos extractivos, como al incremento de las actividades agrícolas que están llevando al límite la supervivencia del Parque. Es decir, que la política ambiental auspiciada por la Junta de Andalucía, lejos de pretender mitigar la sobreexplotación de Doñana, garantizando su supervivencia, está apostando justo por la dirección contraria, con todos los riesgos que ello conlleva para la fauna, la flora y, en su conjunto, para el delicado equilibrio ambiental de la Reserva.

Si bien las Comunidades Autónomas ostentan competencias para la ordenación de su territorio y, como parte de esta actividad, para definir y delimitar los usos del suelo, el hecho de que Doñana sea un Parque Nacional -además, Patrimonio de la Humanidad- con tantas figuras de protección internacionales debería suponer una garantía de protección territorial y por lo tanto límites necesarios y razonables al desarrollo económico. La calificación como Parque Nacional y espacio de la Red Natura 2000, hace de Doñana una parte valiosísima del patrimonio natural europeo y, por tanto, de todas las ciudadanas y ciudadanos de España y Europa.

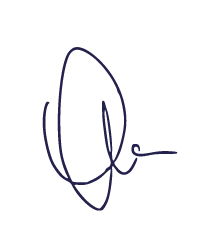
Por todo ello, Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. **A ejercer sus competencias y funciones sobre el Parque Nacional de Doñana para garantizar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de justicia de la UE**, la directiva marco del agua y las de aves y hábitats, incluyendo la paralización de toda tramitación normativa que permita consolidar o auspiciar la sobreexplotación de los acuíferos.
2. **Garantizar el cumplimiento de las 15 recomendaciones de la UNESCO de julio de 2021 para preservar el Parque nacional de Doñana**, como se comprometieron tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía, especialmente las dirigidas a la implementación del Plan Especial de la Corona Forestal, la creación de una zona de amortiguación que incluya al Parque Natural, la zona Ramsar, la zona declarada por la UE como Natura 2000 y otras áreas protegidas en las cuencas inmediatas, la actualización de los indicadores de seguimiento o a incrementar los esfuerzos de investigación dirigidos a entender las relaciones entre la hidrología y la ecología de este espacio.
3. **Incrementar los recursos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico** para cumplir eficazmente con sus competencias de control de los recursos hídricos, así como las tareas imprescindibles de inspección y medidas para detener la sobreexplotación de los acuíferos incluyendo el cierre de todas las captaciones ilegales que están robando agua al Espacio Natural de Doñana.
4. Implementar urgentemente las medidas planificadas para **las captaciones de Matalascañas** y frenar aquellas **infraestructuras hidráulicas al norte de Doñana** destinadas a favorecer el avance de la agricultura intensiva.

Congreso de los Diputados 29 de enero de 2022



**Íñigo Errejón Galván Inés Sabanés Nadal**

Portavoz del Grupo Parlamentario Diputada Más País Verdes Equo